PAISAJE BIOCULTURAL: PARTICIPACIÓN VS GESTIÓN ASOCIADA DEL TERRITORIO

*Federico Morales Barragán*¹

RESUMEN

El concepto paisaje biocultural se ha discutido mediante la articulación de perspectivas ecológicas y antropológicas. La etnoecología constituye un campo de conocimiento que pone de manifiesto ese vínculo. Desde esa perspectiva, el concepto se define a partir de un contexto cultural específico que relaciona la naturaleza, la producción y el conocimiento, trasciende la adopción de criterios técnicos provenientes de la ecología y se convierte en referente de procesos de autoafirmación y empoderamiento de pueblos originarios que cuestionan los términos de las políticas convencionales de conservación. Una posición similar es compartida por contribuciones elaboradas desde la geografía crítica. En fechas recientes se ha promovido en México un acuerdo para convertir los paisajes bioculturales en mecanismos generalizados de gestión territorial sustentable. En ese marco, se sostiene que la participación de diversos sectores sociales constituye un aspecto clave de la gobernanza de esos territorios para hacer un uso sostenible de los recursos y mejorar las condiciones de vida de su población. Este texto cuestiona esa concepción de gestión, pues considera que la implementación de los paisajes bioculturales expresa formas emergentes de control social bajo la premisa de la participación; también que dichos paisajes, más que instrumentos de desarrollo y conservación del patrimonio, constituyen instrumentos de enajenación y conformación de políticas de contención territorial, homogeneizando las diferencias socio-culturales. En oposición a esa forma de conducir los asuntos de esos territorios, se plantea que la noción de gestión asociada permite configurar un proceso contrario a la idea hegemónica de la participación, conceptualmente limitada y políticamente excluyente, y que tal noción puede orientar la construcción de un diseño institucional alternativo basado en un enfoque territorial que no diluya la heterogeneidad de intereses y necesidades de los actores involucrados en los problemas de esos territorios.

Palabras clave: PAISAJE BIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN, GESTIÓN ASOCIADA.

¹ Doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable. CEIICH-UNAM, jfmoralesb@gmail.com.

Agradezco los comentarios y sugerencias de la Dra. Carla Filipe Narciso. Como es habitual, el texto presentado es responsabilidad exclusiva del autor.

PAISAJE BIOCULTURAL: PARTICIPACIÓN VS GESTIÓN ASOCIADA DEL TERRITORIO

INTRODUCCIÓN

Desde los años setenta, el tema de la degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad, fruto de las intensas actividades antrópicas, empieza a adquirir gran relevancia en los discursos políticos internacionales (Leff, 2010; Lezama y Domínguez, 2006; CMMAD, 1991) y figura en indicadores, programas y lineamientos de la política nacional y local (Filipe, 2018; Smith, 1984, 2007; Rodrigues, 2012; Swyngedouw & Heynen, 2003).

En estos términos y a partir de los años ochenta, la ecología de la conservación pasa a ser un nuevo paradigma de la ecología (Washitani, 2001), cuyo objetivo es mantener la diversidad biológica del paisaje para garantizar la sostenibilidad de las generaciones futuras a largo plazo.

El término paisaje se refiere al “área, tal como la percibe la población, cuyo carácter es resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000: 2) y que se construye con base en una serie de características naturales y culturales que hay que identificar y preservar (UNESCO, 1972).

De ahí emerge el concepto de paisaje cultural con la intención de promover el desarrollo de la población que lo habita, así como de la necesidad de proteger su identidad. Más recientemente surge el concepto de paisaje biocultural, territorio delimitado, orientado a la conservación del patrimonio cultural y natural, así como al desarrollo sustentable de las economías rurales. También se define como un “territorio que comparte un paisaje e identidad propia, manejado bajo un régimen unificado de gestión territorial que permite promover el desarrollo económico sustentable por medio de la protección y valoración de la naturaleza y la cultura local” (Bezaury et al., 2018: 83).

El concepto paisaje biocultural tiene como referente el modelo francés de parques naturales regionales (Lefebvre y Moncorps, 2013), se opera a través de planes de gestión territorial que buscan articular distintos actores. La participación de la población en ese proceso, se considera un factor clave para la gobernanza de esos territorios.

Estos modelos se están introduciendo en América Latina como una forma de gestión de territorios rurales con características socio-espaciales particulares, entre ellas, la presencia de pueblos originarios, de especializaciones productivas en bienes y servicios asociadas a nichos de mercado que premian denominaciones de origen, del patrimonio tangible de representaciones culturales arquitectónicas y paisajísticas y de un sistema de conocimientos y prácticas que se expresan en formas de manejo y relación con la naturaleza, aspecto este último que se considera una expresión del patrimonio intangible.

Este tipo de territorios se ha caracterizado mediante el enfoque conocido como nueva ruralidad (De Grammont, 2004; CEDRSSA, 2006). Perspectiva que destaca la multifuncionalidad de los territorios rurales. Paradójicamente, el modelo de gestión asociado al concepto paisaje biocultural y que en México se ha promovido como una forma de gestión sustentable de los territorios rurales (Bezaury et al. 2018), tiende a revertir ese carácter multifuncional en favor de nuevas formas de especialización, en las que cobra cada vez más relevancia la actividad turística y el pago por la prestación de servicios ecosistémicos.

En ese marco resulta necesario discutir aspectos relacionados con el diseño institucional promovido desde el concepto paisaje biocultural. En particular, conviene ubicar los límites conceptuales y políticos de la noción participación inserta en dicho diseño. En oposición a esa perspectiva, en este texto se plantea que la gestión asociada es una noción que ofrece pautas para construir diseños institucionales

para el desarrollo sustentable, conceptualmente más sólidos y políticamente incluyentes. Lo anterior obedece a que el enfoque territorial que da sustento a dicha noción plantea la pertinencia de una perspectiva multiescalar, propuesta metodológica adecuada para establecer criterios de gestión territorial que incluya a todos los actores involucrados con los problemas de esos paisajes, contemple las políticas nacionales y locales relevantes y reconozca las particularidades socio-culturales de los distintos territorios.

La discusión recién planteada se desarrolla en dos secciones. La primera ubica el concepto paisaje biocultural en términos de las aproximaciones que han contribuido a delimitar y precisar su significado y alcance. La segunda sección se ocupa del modelo de gestión territorial asociado a dicho concepto que desde hace unos años se promueve en México y que enfatiza el papel de la participación. En contraste, se propone, la noción gestión asociada, que puede dar soporte a formas alternas de conducción de los asuntos de ese tipo de territorios.

PAISAJE BIOCULTURAL: APROXIMACIONES Y DEFINICIONES

De acuerdo con Alarcón-Cháires y Toledo (2018) el afán por comprender las relaciones entre la sociedad, la cultura y la naturaleza ha propiciado el surgimiento de áreas del conocimiento que articulan la ecología con diferentes campos de las ciencias sociales y las humanidades. Entre ellas pueden mencionarse la ecología cultural, la antropología ecológica y la etnoecología. “En los tres casos, el objetivo central es el estudio del proceso de apropiación humana de la naturaleza tanto en su dimensión material como en la inmaterial, entre las sociedades pre-modernas o pre-industriales y especialmente dentro de los grupos nómadas y las comunidades y aldeas agrícolas” (Alarcón-Cháires y Toledo: 2018:1). El sesgo de estas perspectivas, en relación al tipo de territorios a los que se refieren, es evidente y está relacionado con el concepto paisaje biocultural.

Estos autores señalan que en el caso de la etnoecología, sus raíces se ubican en al menos cuatro vertientes: la etnobiología, la agroecología, la etnociencia y la geografía ambiental. La referencia a este campo de conocimiento obedece al papel que han tenido en su desarrollo las opiniones vertidas en distintos foros y documentos cuyo contenido ha alimentado, a su vez, el concepto paisaje biocultural. Entre tales foros y documentos se mencionan, Nuestro Futuro Común de 1987; la Convención de Diversidad Biológica de 1993, la Declaración de Budapest de 1999, sobre la Ciencia y la Utilización del Conocimiento Científico; la Convención Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003; la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005; y, el Protocolo de Nagoya de 2010, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, entre otros.

La importancia de la perspectiva etnoecológica, a decir de (Alarcón-Cháires y Toledo, 2018) consiste en que correlaciona la diversidad biológica y la cultural y destaca la relevancia de los pueblos originarios en la apropiación naturaleza.

Esto implica que la etnoecología refiere el análisis de grupos humanos no como objetos de estudio, sino como sujetos sociales quienes ponen en acción procesos intelectuales (conocimiento y creencias), toman decisiones y ejecutan operaciones prácticas. Por ello, la etnoecología se convierte ‘en una disciplina que cubre los tres dominios inseparables del paisaje: la naturaleza, la producción y la cultura’” (Alarcón-Cháires y Toledo, 2018: 4).

En la revisión que hacen estos autores sobre distintos aspectos relevantes de la etnoecología destaca su aporte para comprender los sistemas de conocimiento puestos en juego en las relaciones que establecen los seres humanos con la naturaleza, acotadas a un entorno específico. También el hecho de que tales

sistemas van de la mano de formas de organización social. Los aspectos sociales, cognitivos y culturales están imbricados en aquellas relaciones y se manifiestan en formas específicas de manejo de la naturaleza. El sistema territorial al que se refiere el paisaje biocultural está definido a partir de un contexto cultural específico, por ello, la escala de análisis es necesariamente local, acaso regional. Se dice también, más en forma de aspiración que de propuesta metodológica específica, que tal análisis no puede sustraerse de las influencias ejercidas por otras escalas de menor detalle.

No es menor la referencia que los mismos autores hacen al trabajo de Berkes (1999) quien subraya el carácter adaptativo del sistema de conocimientos y saberes locales, por ello las creencias y prácticas coevolucionan con la naturaleza. Asunto relevante que atañe a las formas de gestión de los paisajes bioculturales, pues éstas inciden en aquellas formas de coevolución.

En lo dicho hasta ahora, pareciera como si el problema del poder estuviera ausente de la mirada de la etnoecología, lo cual resulta un contrasentido dado el perfil de su aproximación que ha quedado esbozado y que se reafirma con la cita siguiente. “La etnoecología ha devenido también un instrumento de empoderamiento local sustentado en el reconocimiento de las sabidurías ancestrales que dinamizan la vida de muchos pueblos, así como la valoración del entorno natural que habitan” (Alarcón-Cháires y Toledo, 2018: 23).

No obstante, para el problema que nos ocupa, el diseño institucional de gestión de los paisajes bioculturales que se promueve en México, resulta necesario contemplar el aporte de la ecología política que atiende explícitamente las formas de gestión de los paisajes y los problemas de poder que esto entraña.

La ecología política aborda el cómo las diferencias de poder y luchas están involucradas en las interacciones humano-ambientales, lo que permite relacionarla con la justicia económica, la social y la ambiental. Los debates sobre la ecología política refieren las condiciones sociales y políticas que rodean las causas, experiencias y la gestión de los problemas ambientales. No es ajeno a la ecología política los análisis relacionados con las políticas públicas, los derechos humanos, la gestión territorial y de recursos naturales por parte de los pueblos locales que comúnmente se traducen en luchas y empoderamiento sociales, la reconstrucción de la identidad y la resolución de conflictos (Alarcón-Cháires y Toledo, 2018: 19-20).

La referencia a las luchas por la defensa de los recursos naturales de los pueblos encuentra en el concepto paisaje biocultural un marco más amplio, pues su alcance se refiere a la defensa del respeto a una forma de vida enraizada en un territorio, lo que significa que ésta no es reproducible en cualquier otro lado.

La discusión ofrecida por Páez-Díaz y Narchi (2018) se ubica justo en esa vertiente y se refiere a la administración del Páramo de Sumapaz en Colombia. “Nuestro ensayo está encaminado a subrayar los modos en que la administración del Estado territorializa los espacios de conservación en modos y formas ajenos y adversos a los modos de vida campesina” (Páez-Díaz y Narchi, 2018; 14).

La ubicación de los ecosistemas de páramo sobre la franja tropical del planeta, unida a sus características biogeofísicas, son rasgos que los convierten en valiosas reservas de agua que han sido utilizadas para abastecer a los territorios urbanos aledaños. Estos ecosistemas se caracterizan, también, por acumular grandes cantidades de carbono. Estas condiciones y el hecho de ser territorios habitados los convierte en escenarios de confrontación de intereses contrapuestos. Tal es el caso del Páramo de Sumapaz. Los conflictos ahí registrados emergen “a partir de la imposición de “lo que es” y “para qué sirve” el páramo y que son exacerbados por la imposición de una cultura hegemónica que define la naturaleza. En la

actualidad, el páramo de Sumapaz experimenta una creciente incursión de megaproyectos hídricos y mineros, sumados a una constante expansión de la frontera agrícola y ganadera en algunas partes de este ecosistema” (Páez-Díaz y Narchi, 2018: 15).

Haciendo referencia a opiniones emitidas por Escobar (2000) y Pálsson (2001), estos autores señalan que

En Latinoamérica, las estrategias oficiales de conservación están inmersas en un paradigma que concibe a la naturaleza como una extensión de dominio humano que debe ser protegida por los diversos servicios ambientales que suministra. Estos servicios ambientales -comerciables- son explotados y transformados a través de relaciones de poder, control y dominio, que se justifican, en una suerte de orientalismo ecológico, como un intento por domesticar la naturaleza en pos del desarrollo. En la actualidad los discursos de conservación sumergen a las distintas poblaciones culturales que habitan espacios y ecosistemas sujetos a conservación, a una violencia ambiental sistemática (Narchi, 2015), imponiendo el esquema orientalista de las relaciones sociedad-naturaleza que fortalece el control del estado-nación (Páez-Díaz y Narchi, 2018: 16-17).

Las políticas de conservación aparecen en esta cita como un todo indiferenciado, ello reduce las explicaciones a las dualidades dominación/despojo-resistencia. El Estado y los campesinos residentes se muestran como actores homogéneos. Se parte de proposiciones acerca de modelo de acumulación mundial, conducido por actores indiferenciados que usan su poder para hacer uso de los recursos de acuerdo a la lógica dictada por las necesidades de acumulación, lo que conduce a modalidades de despojo de tierras o en el mejor de los casos a formas de gestión territorial ajenas a las formas de vida y organización social de población residente. El Estado como entidad indiferenciada aparece sólo como cómplice o facilitador del despojo o la explotación.

Las variantes que estos autores identifican en la posición de los funcionarios gubernamentales, no modifica la explicación general planteada en términos de la dualidad dominación/despojo-resistencia.

Mientras algunas autoridades ambientales y administrativas hablan de programas de conservación, otras hablan de reconversión económica, incentivos de conservación para los campesinos, programas de ecoturismo, pago por servicios ambientales, alternativas productivas, y compra de predios para la conservación, entre otras, que son características del discurso homogeneizador de las relaciones sociedad-naturaleza (Páez-Díaz y Narchi, 2018: 19).

Se ha visto que según (Alarcón-Cháires y Toledo, 2018) el concepto paisaje biocultural trasciende las valoraciones estrictamente técnicas para proponer las delimitaciones que se derivan de éste, pues tales acotamientos se definen a partir de un contexto cultural específico, local o regional. De hecho, éste es uno de los aportes ofrecidos por la etnoecología. Desde esta perspectiva, el concepto paisaje biocultural da cabida a procesos de autoafirmación y empoderamiento. “Por ello, la ‘unidad de comunidad-territorio indígena’, es decir, el complejo biocultural, es un verdadero constructo político de resistencia” (Luque, et al., 2018: 26).

La posición de Páez-Díaz y Narchi (2018) es similar, aunque construida desde la geografía crítica.

En el páramo, la riqueza biocultural está inmersa en las actividades y prácticas cotidianas de los lugareños... Es necesario registrar y entender estas prácticas para que las autoridades ambientales reconfiguren el discurso y las prácticas que desde la oficialidad definen al páramo, para que incluyan los conocimientos ecológicos locales (CEL)... Este conocimiento contribuye a mejorar el bienestar humano y

ecosistémico, permitiendo así una conservación biocultural que desemboca en justicia ambiental (Páez-Díaz y Narchi, 2018:20).

Tanto las reflexiones de la etnoecología como las de la geografía crítica consideradas en este texto ponen de manifiesto la crítica que emerge del concepto paisaje biocultural hacia las formas de gestión promovidas por las políticas de conservación convencionales. “Con el concepto de patrimonio biocultural no se trata de “patrimonializar” desde el exterior un legado biocultural para ser enajenado por terceros; se trata de un bien común no privatizable como herramienta de defensa de las diversidades culturales y biológicas” (Boege, 2018: 57).

Sin embargo, no se vislumbran propuestas específicas acerca de los diseños institucionales que podrían emanar de esa posición, opuesta a las políticas convencionales de conservación, tampoco se registra una opinión acerca de los mecanismos propuestos para México (Bezaury et al. 2018) que consideran a los paisajes bioculturales como una forma generalizada de gestión sustentable.

Las opiniones que se han registrado hasta ahora oscilan entre la crítica general a las formas de dominación y despojo que se asocian con las políticas convencionales de conservación (Páez-Díaz y Narchi, 2018;) y señalamientos, también generales, que idealizan las prácticas llevadas a cabo en comunidades habitadas por pueblos originarios. Está ausente un análisis institucional que caracterice las posibilidades y límites de esas formas de organización y en particular su relación con la organización política del estado mexicano.

... en sus territorios los indígenas están construyendo sistemas de producción sustentables de nuevo tipo como son los del café, pimienta y miel orgánica, procesos agroecológicos para incorporarlos a mercados justos y con sellos verdes y provenientes de pequeñas producciones campesinas e indígenas o bien, policías comunitarias en múltiples comunidades y municipios. Igualmente, el manejo forestal comunitario. Entonces, en la gestión territorial indígena a distintas escalas fluyen los paisajes bioculturales en los cuales los recursos fitogenéticos indígenas tienen gran importancia aun que muchas veces no son visibilizados en las luchas. (Boege, 2018: 60).

En la siguiente sección se presenta la propuesta de gestión territorial asociada al concepto paisaje biocultural promovida recientemente en México y se plantea una crítica inicial que contrasta las nociones de participación y gestión asociada.

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN ASOCIADA: FORMAS ALTERNAS DE GESTIÓN TERRITORIAL

Bezaury et al., (2018) reporta que a partir de 2011 se estableció un diálogo entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Estas conversaciones se han orientado a explorar las posibilidades de adaptar el concepto y herramientas de gobernanza del modelo de Parque Natural Regional francés al contexto mexicano. para así conservar la diversidad biológica y cultural y promover el desarrollo rural sustentable en México.

En ese texto se menciona que el estudio realizado en 2012 por The Nature Conservancy con el apoyo de la AFD concluye que este esfuerzo es viable y necesario por las siguientes razones. Por una parte, el documento Vacíos y Omisiones en Conservación de la Biodiversidad Terrestre en México elaborado por (Conabio et al. 2007) plantea que el 43% de la superficie terrestre del país requiere manejarse desde una perspectiva que permita conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta ofrece.

En segundo lugar, la adaptación del concepto de parques naturales regionales abre la posibilidad de establecer un mecanismo transversal entre las entidades de la administración pública federal de México que enriquece la perspectiva del mecanismo actualmente disponible de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

También, los nuevos esquemas de gestión y gobernanza podrían articular los propósitos de conservación de la biodiversidad y el paisaje con los referidos a la preservación de bienes del patrimonio cultural y sus zonas de amortiguamiento. De esta forma sitios inscritos por México en la Lista de Patrimonio Mundial como son el Paisaje de Agave e Instalaciones Industriales de Tequila (86,280 ha), el Camino Real de Tierra Adentro (271,159 ha) y el Sistema Hidráulico Acueducto del Padre Tembleque (41,360 ha), dispondrían de instrumentos adecuados para su gobernanza efectiva (Bezaury et al., 2018: 79).

Además, podrían fortalecerse y ampliarse algunos mecanismos existentes como las áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC) de la Conanp.

La adaptación del concepto de los parques naturales regionales para México representaría una nueva herramienta para la creación de áreas naturales protegidas por medio de esquemas voluntarios de concertación social a nivel municipal y que éstas puedan abarcar extensiones de mayor superficie que la de los predios individuales contemplados actualmente por las ADVC (Bezaury et al., 2018: 80).

Adicionalmente, se podrían establecer esquemas de gestión y gobernanza voluntaria para el manejo de los sitios inscritos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar, ubicados fuera de las áreas naturales protegidas gubernamentales, y que actualmente carecen de un instrumento para su manejo efectivo.

Finalmente, se considera que el manejo integrado del paisaje y la interconectividad de ecosistemas serían fortalecidos con la adopción de los paisajes bioculturales como un nuevo instrumento de gestión integrada del territorio. Propósito coherente con lo establecido en los objetivos específicos del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018 (Semarnat y Conanp, 2015).

Con base en los argumentos expuestos se considera que los paisajes bioculturales pueden ser una herramienta útil para conservar el patrimonio natural y cultural con base en la planificación de los usos tradicionales del suelo. Se cree que además esta forma de gestión territorial puede contribuir al crecimiento económico local a través del desarrollo rural sustentable y el desarrollo urbano armónico.

Los paisajes bioculturales serán considerados como áreas naturales protegidas establecidas voluntariamente a solicitud de los municipios y delegaciones [actualmente alcaldías] rurales del Distrito Federal [actualmente Ciudad de México], con el consenso de organizaciones sociales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, productores, iniciativa privada, organizaciones conservacionistas y líderes de opinión locales, en colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y su validación y apoyo por parte de la federación a través de la Semarnat y la Conanp (Bezaury et al. 2018: 81-82).

En relación al diseño institucional que acompaña esta propuesta enseguida se mencionan sus rasgos principales.

El régimen de manejo territorial del paisaje biocultural se define y adopta voluntariamente por los gobiernos municipales, las entidades federativas y órganos de representación de grupos sociales involucrados. El paisaje en cuestión recibe un “certificado de establecimiento” emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para lograr esta certificación se establece un grupo de trabajo integrado por entidades gubernamentales de distintos órdenes y distintos sectores de la sociedad. Se agrega un elemento que merece destacarse, "... y en su caso por un órgano de gobernanza territorial preexistente, quienes tendrán la tarea de elaborar el "programa de gestión territorial ... Idealmente, los integrantes del grupo promotor serán quienes conformarán los 'órganos de gobierno' y los 'consejos ciudadanos' de los paisajes bioculturales, una vez que estos sean certificados." (Bezaury et al., 2018: 82-83).

El programa de gestión territorial es un pacto establecido entre el municipio y los órganos de representación de los grupos sociales. En éste se precisan los objetivos, estrategias y programas para instrumentar la protección, valorización y desarrollo del paisaje biocultural, con un horizonte temporal de 15 años. La elaboración del programa está a cargo de los municipios, con la participación de los órganos de representación de la población residente, otros actores locales y con el apoyo de otros integrantes del grupo promotor. El programa es evaluado por la Conanp y constituye la base para la emisión del certificado de establecimiento de los paisajes bioculturales. El programa debe considerar al menos los siguientes aspectos:

Los órganos de gobierno, administración y manejo, participación y consulta del área.

La zonificación del área, de conformidad con el programa o programas de ordenamiento ecológico regional o locales del territorio, así como los planes de desarrollo urbano de los centros de población vigentes.

Las acciones de protección, conservación y restauración de los recursos naturales y culturales del área.

Los lineamientos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del área (Bezaury et al., 2018: 83).

El programa es presentado por los municipios a la Semarnat, preferentemente con el respaldo de los gobiernos de las entidades federativas. Una vez aprobado el programa de gestión y emitido el certificado, éste tiene una validez de 15 años y puede ser renovado mediante la elaboración de un nuevo programa de gestión territorial. "Debido a que el certificado es un instrumento de carácter estrictamente voluntario, es importante enfatizar que en todo momento uno o varios de los municipios involucrados, podrán optar por sustraer su territorio del paisaje biocultural" (Bezaury et al., 2018: 83).

En relación a su gobierno, los paisajes bioculturales disponen de un órgano de composición mixta, predominantemente pública. Incluye a los representantes ciudadanos elegidos para tal efecto por el consejo ciudadano donde participan los municipios involucrados y las dependencias federales y de las entidades federativas que los propios municipios determinen. Este órgano es el responsable de hacer cumplir el programa de gestión territorial. Para ello, cuenta con el apoyo de una unidad operativa, estructura técnica-administrativa encargada de la conducción cotidiana de los paisajes bioculturales.

El consejo ciudadano es un órgano de consulta y participación social que involucra diversos tipos de actores. Este consejo elige los representantes que participarán en el órgano de gobierno del paisaje.

La federación de paisajes bioculturales constituye un ámbito de coordinación a nivel nacional en el que participan miembros de los órganos de gobierno o las unidades operativas.

Sus objetivos incluyen el promover los intereses comunes del conjunto o sistema de paisajes bioculturales; llevar a cabo programas de interés común de sus afiliados; intercambiar experiencias a nivel técnico y científico, y generar y proveer de información al público sobre los beneficios que brindan

al conservar la cultura y la naturaleza. Una vez conformada, la federación auxiliará a la Semarnat y la Conanp en el establecimiento y gestión de los paisajes bioculturales (Bezaury et al., 2018: 85).

Un distintivo de la forma de gobierno de los paisajes bioculturales se expresa en el comité de marca, entidad responsable de atender todo aquello relacionado con el buen uso y calidad de los productos del paisaje y promover la obtención de una marca, otorgada por la Semarnat, cuya finalidad es dar un valor agregado a los productos del paisaje. En particular, este comité es responsable de

... definir las normas particulares para su uso en productos, servicios y en las prácticas tradicionales que caracterizan la identidad de la región; las normas básicas de calidad de los mismos; reducir los impactos culturales y ambientales negativos derivados del uso y aprovechamiento de recursos naturales, de los procesos de producción o prestación de los servicios; promover el uso de materias primas de procedencia local y, definir los procesos de verificación, supervisión y sanción (Bezaury et al., 2018: 85-86).

Finalmente, en cuanto a los recursos financieros de los paisajes bioculturales se hace referencia a los instrumentos de inversión concurrente que involucran a entidades de los distintos órdenes de gobierno. En particular se mencionan los esquemas establecidos en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Además de estos recursos presupuestales, los paisajes bioculturales pueden gestionar recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento mediante el establecimiento de acuerdos o convenios.

Los rasgos señalados con anterioridad más los planteamientos expuestos en la primera sección dan la pauta para formular diversos comentarios.

Se aprecia, en primer lugar, la ausencia de propuestas sobre diseños institucionales que orienten la forma en que se podría materializar el concepto paisaje biocultural como instrumento de autoafirmación y empoderamiento de los pueblos originarios. Los señalamientos formulados desde la geografía crítica tampoco ofrecen análisis sobre los mecanismos institucionales mediante los cuales se pueda entender la dualidad dominación/despojo-resistencia.

Una vez expuestos los lineamientos del diseño institucional para instrumentar los paisajes bioculturales como instrumentos de conservación del patrimonio cultural y natural y de promoción del desarrollo sustentable, se aprecia un vacío analítico sobre la relación de este diseño con las posiciones provenientes tanto del lado de la etnoecología como de la geografía crítica. En principio se aprecia la necesidad de avanzar en la construcción de análisis institucionales provenientes de aquellas posiciones y también de otras que se orienten a dilucidar los alcances y límites de la propuesta basada en los parques naturales regionales de Francia. Lo que sigue es una reflexión inicial en este último sentido.

El carácter voluntario de la conformación de paisajes bioculturales les resta fuerza como instrumento eficaz de desarrollo. Los incentivos financieros para su constitución son de carácter marginal, propuesta que resulta incongruente con la valoración de la Conabio acerca de que el 43 por ciento del territorio terrestre del país requeriría de mecanismos de gestión para conservar el patrimonio cultural y natural que ahí se encuentra.

El establecimiento de los paisajes bioculturales depende fundamentalmente de la conformación de un equipo promotor preexistente, que promueve la formación del grupo de trabajo que estará encargado de elaborar el programa de gestión territorial. No se ofrecen más detalles al respecto, simplemente conviene preguntarse acerca de quiénes son los actores que pueden integrar estos equipos. Quiénes son los actores ubicados en otras escalas que pueden financiar las actividades de estos grupos.

Poco se dice de la forma en que esta iniciativa, presumiblemente basada en un enfoque territorial, puede insertarse en un diseño institucional regido por una lógica sectorial. Surge el cuestionamiento acerca de cómo puede ensamblarse el paisaje biocultural como mecanismo de gestión territorial con las atribuciones y facultades de los gobiernos municipales, estatales y federal, cuya definición se basa en una perspectiva claramente sectorial.

No se vislumbran mecanismos para la construcción de acuerdos. Los acuerdos políticos que exige la construcción del plan de gestión territorial no son puestos en juego en la discusión sobre la gobernanza de los paisajes. De tal suerte, la gobernanza parece reducida a un proceso de carácter técnico que depende sólo del establecimiento de instancias, cuya legitimidad política se alcanza mediante la participación de la sociedad a través del consejo ciudadano, el cual es simplemente un órgano de consulta. En estricto sentido su presencia es irrelevante para la construcción del programa de gestión territorial.

El programa de gestión territorial, se dice, expresa un pacto establecido entre el municipio y los órganos de representación de los grupos sociales. Ese pacto exige un proceso de construcción de acuerdos políticos donde los intereses y necesidades de los actores se ponen en juego. Si el órgano ciudadano es sólo consultivo, por más que se invoque la participación, el diseño institucional del paisaje biocultural no cuenta con las herramientas para construir el pacto político señalado.

Lo anterior suscita suspicacia, pues pareciera como si un actor o coalición de actores no explícitos promoviera esta forma de gestión y, mediante la consolidación de una experiencia, se aspira a generalizar este mecanismo y obtener beneficios, por ejemplo, a través de asesorías relacionadas con la conformación de equipos promotores preexistentes.

No obstante señalarse que el 43 por ciento del territorio terrestre requiere formas de gestión con los propósitos declarados de los paisajes bioculturales, no queda clara la articulación de todos ellos, en términos de una política de estado que exigiría una aproximación multiescalar para su definición. La federación de paisajes, otro órgano consultivo, pareciera una forma de legitimar su pertinencia y posicionar los paisajes en otra escala, la nacional. Sin embargo, ya se mencionaron los límites de este tipo de mecanismos consultivos. En rigor, irrelevantes.

La forma de gestión vinculada al concepto paisaje biocultural, concibe a estos como una simple suma de espacios independientes, perspectiva que corresponde a intereses particulares, objetivos sectoriales, funcionalistas y conservacionistas, y paradójicamente de corto plazo.

Este tipo de gestión del paisaje tiene un carácter instrumental que ha permitido legitimar y fijar los procesos sociales en parcelas de territorios fragmentados y desconectados, concebidos como contenedores, que no permiten entender las distintas formas de reproducción social. A su vez, este tipo de diseño institucional genérico propone un modelo de gobernanza con formas de participación simuladas, enmarcadas en formas homogéneas de territorialización, que según Sack (1986) es un esfuerzo estratégico y deliberado de “un individuo o grupo para afectar, influenciar y controlar gente, fenómenos o relaciones, mediante la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica. Esto a su vez tiene implicaciones importantes en la distribución de los recursos y en el desarrollo geográfico, ambos desiguales.

En este sentido, los procesos de construcción de los marcos institucionales de la gestión del territorio, presumen que la participación es una condición necesaria para la efectividad de los procesos, sin embargo, ésta aparece como un elemento accesorio y no constitutivo de la gestión. A su vez, esa noción de participación es conceptualmente imprecisa porque no comprende a todos los actores involucrados

en el proceso, solo se aplica a la población residente, o en todo caso, a los actores no gubernamentales. Cómo podría llamarse entonces el involucramiento de los actores gubernamentales en el diseño de los programas de gestión territorial. Si no es participación, qué nombre debe recibir este tipo de vinculación.

Las implicaciones territoriales de este tipo de gestión representan paradójicamente la pérdida de la diversidad, de la multifuncionalidad caracterizada en términos de la nueva ruralidad, en favor de una especialización refuncionalizada que se manifiesta en la producción de bienes o servicios certificados del paisaje biocultural o el pago de servicios ecosistémicos.

En oposición al diseño institucional estandarizado de la concepción de paisaje biocultural, se propone la noción de gestión asociada que comprende a todos los actores involucrados en el proceso y a su vez entiende al paisaje y a los territorios como sistemas abiertos, por lo tanto interconectados. Esto muestra la importancia de visualizar los procesos desde una política de escalas y desde las geografías del poder, perspectiva asociada a la geopolítica, en sus distintos enfoques.

En contraste con la noción de participación que se materializa en órganos consultivos, y por lo tanto es políticamente excluyente, la gestión asociada pone en el centro el desafío de construir el pacto político y técnico que debe plasmarse en el programa de gestión territorial. Ello cuestiona de raíz el carácter consultivo del consejo ciudadano y de la federación de paisajes bioculturales.

La gestión asociada está anclada en un enfoque territorial que concibe a los territorios como construcciones sociales, edificados sobre una base material provista por la superficie del planeta. Al definirse de esa forma, los territorios evolucionan como resultado de las interacciones entre los actores involucrados en sus problemas; la gestión asociada es la noción que da cauce a la institucionalización necesaria para dirimir conflictos, para negociar en torno a intereses contrapuestos.

Los paisajes bioculturales, en los términos propuestos para México, los convierte en instrumento de una política de fragmentación territorial, que, al buscar la individualización de los territorios a través de los discursos generales hegemónicos del valor cultural y patrimonial y la biodiversidad, neutraliza los conflictos socio-territoriales, mediante los procesos de participación. El diseño institucional genérico propuesto pierde pertinencia y legitimidad porque está descontextualizado.

REFLEXIONES FINALES

La discusión llevada a cabo en este texto pone de manifiesto la necesidad de construir análisis institucionales que cumplan distintos objetivos. Para quienes postulan desde la etnoecología la pertinencia del concepto paisaje biocultural como instrumento de autoafirmación y empoderamiento de los pueblos originarios, el análisis institucional, que puede aportar la ecología política, brindaría elementos para construir diseños institucionales que permitan materializar aquella afirmación emancipatoria. Para quienes plantean cuestionamientos desde la geografía crítica, les permitiría precisar las formas en que evoluciona la dualidad: dominación/explotación-resistencia.

En el caso, a nuestro juicio muy necesario, del esclarecimiento de la propuesta promovida en México para adaptar los esquemas de gobernanza de los parques naturales regionales de Francia, el análisis citado contribuiría a evidenciar los límites y alcances del diseño institucional propuesto. Atendiendo esta última preocupación, se ha ofrecido una opinión inicial, los cuestionamientos expuestos se acompañan de una reflexión general que contrasta las nociones participación y gestión asociada. Ambas se han utilizado para formular un cuestionamiento al diseño institucional vinculado con el concepto paisaje biocultural.

En cuanto a la primera noción se han mostrado sus limitaciones conceptuales y políticas. En relación a la segunda se ha argumentado en favor de las posibilidades que ofrece para construir diseños institucionales conceptualmente más precisos y políticamente incluyentes.

REFERENCIAS

Libros

Leff, E. (2010) *Saber Ambiental*. México, Siglo XXI Editores.

Sack, R. (1986). *Human Territoriality: its theory and history*. Cambridge, Cambridge University Press.

Smith, N. (1984) *Uneven Development: Nature, Capital and the production of space*. Oxford, Basil Blackwell.

Capítulos

Bezaury, J. et al. (2018) Paisajes bioculturales: un planteamiento mexicano. En: V.M. Toledo y P. Alarcón-Cháires eds. *Tópicos bioculturales*, Morelia: UNAM, pp. 77-88.

Boege, E. (2018) Hacia una antropología ambiental para la apropiación social del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. En: V.M. Toledo y P. Alarcón-Cháires eds. *Tópicos bioculturales*, Morelia: UNAM, pp. 34-66.

Luque, D. et al. (2018) Los complejos bioculturales. En: V.M. Toledo y P. Alarcón-Cháires eds. *Tópicos bioculturales*, Morelia: UNAM, pp.7-33.

Artículos

Filipe Narciso, C. (2018) Estructura Ecológica Urbana: planeamiento y gestión urbana en la Ciudad de México. *Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Universidad De Cuenca*, 7(12), pp. 137-147.

Smith, N. (2007) Nature as accumulation strategy. *Socialist register*. (43), pp.1–21.

Referencias electrónicas

Alarcón-Cháires, P. y Toledo, V. M. (2018) “La etnoecología”, *Red temática sobre el patrimonio biocultural de México*, [En línea], Michoacán, disponible en: http://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/articulosNODO_MICHOACAN_TRIPTICO_LA_ETNOECOLOGIA.pdf [18 de julio, 2019].

CEDRSSA (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria) (2006) “Nueva Ruralidad: Enfoques y propuestas para América Latina”, *CEDRSSA*, [En línea], México, CEDRSSA, Cámara de Diputados LX Legislatura, disponible en: http://www.cedrssa.gob.mx/post_nueva_ruralidad-n_enfoques_y_propuestas_para_amn-rica_latina.htm [10 de enero 2019].

CMMAD (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) (1991) “Nosso Futuro Comum”, *edisciplinas.usp.br*, [En línea], Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, disponible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf [8 de marzo 2019].

Consejo de Europa (2000) “Convenio Europeo del Paisaje”, *upv.es*, [En línea], Florencia, Comisión Europea, disponible en: <http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670786.pdf> [10 de enero 2019].

De Grammont, H. (2004) “La nueva ruralidad en América Latina”. *Revista Mexicana De Sociología*, 66, pp. 279-300, disponible en línea: <https://www.researchgate.net/publication/275883841> [10 de enero 2019].

Lezama, J. L.; Dominguez, J. (2006) “Medio ambiente y sustentabilidad urbana”, *redalyc* [En línea], Papeles de Población 12, disponible en: <http://sww.redalyc.org/articulo.oa?id=11204906> [8 de marzo 2019].

Lefebvre, Th. y Moncorps, S. (2013) “Las áreas naturales protegidas en Francia”, *UICN*, [En línea], UICN, Paris, disponible en: https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/08/Espaces_naturels_proteges-ES-ok.pdf [15 de marzo 2019].

Páez-Díaz, A. J. y Narchi, N. E. (2018) “Territorialización y desterritorialización en los paisajes bioculturales del páramo de Sumapaz Colombia”, *CLACSO.org*, Boletín Geocrítica Latinoamericana N° 01, octubre, Dossier: Coyuntura política y crisis ambiental en América Latina: lo local, lo regional, lo global, disponible en: https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/archivos/92_bole.pdf [10 de mayo, 2019].

Rodrigues, A. (2012) “La hegemonía del pensamiento neoliberal y el desarrollo sustentable”, *up.edu*, [En línea], Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. XVI, no 418 (60), disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-60.htm> [16 de marzo 2019].

Swyngedouw, E.; Heynen, N. (2003) “Urban political ecology, Justice and the politics of scale”, *onlinelibrary.wiley.com*, [En línea], *Antipode* 35(5), pp. 898-918, disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8330.2003.00364.x> [16 de marzo 2019].

UNESCO (1972) “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”. *Unesco.org* [En línea]. World Heritage Centre. 1972. Disponible en: <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf> [10 de enero 2019].

Washitani, I. (2001) “Plant conservation ecology for management and restoration of riparian habitats of lowland Japan”, *link.springer.com*, [En línea], *Population Ecology* 43(3), pp. 189-195, disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10144-001-8182-8> [8 de marzo 2019].